

Educación pública: ¿inversión o asistencialismo?



Eduardo Fuentes Barra
Director del Liceo Bicentenario de
Excelencia Nuevo Mundo de Mulchén
Magíster en Educación en Valores y
Democracia en América Latina

La crisis económica que atraviesa la educación pública en Chile ha generado un intenso debate sobre las responsabilidades en la gestión de recursos educativos. En este marco, observamos que hay 24 servicios locales en funcionamiento de un total de 70, tras el proceso de traspaso e instalación de la nueva educación pública en el país. Muchos de estos servicios han sido noticia nacional debido a sus problemas económicos, una situación que también afecta a varias Direcciones de Administración de Educación Municipal (DAEM).

Es fundamental reflexionar sobre los recursos que el Estado destina a cada estudiante mediante la subvención escolar. Al evaluar la calidad de la educación pública, a menudo se pasa por alto un aspecto crucial: el financiamiento que hace posible una educación de calidad. El valor de la subvención per cápita, que depende de la asistencia del alumnado, representa un factor crítico. Los días en que un estudiante no asiste a clases, por enfermedad u otras razones, quedan exentos del pago, lo que impacta negativamente en la estabilidad financiera de las instituciones educativas.

Desde esta perspectiva, el actual monto de la subvención se percibe más como una ayuda asistencial que como un recurso que permita fomentar proyectos educativos innovadores y adaptados a las exigencias del siglo XXI. Esto nos lleva a un urgente llamado a la acción: el Estado debe replantearse su enfoque hacia la educación, asumiendo un papel proactivo en garantizar el desarrollo de las futuras

generaciones. Necesitamos entender que la educación no debería verse como un gasto, sino como una inversión esencial que cultivará mentes creativas y competentes, capaces de contribuir al crecimiento y la riqueza del país.

Considerar la educación como una inversión tiene varias razones de peso. Primero, contribuye al desarrollo integral de las personas, convirtiendo potencialidades en capital humano. Esto no solo beneficia a los individuos, que a menudo obtienen ingresos más altos, sino que también genera retornos económicos que impactan positivamente a la sociedad en su conjunto.

Además, la educación es clave para reducir la pobreza. Al ofrecer oportunidades de aprendizaje y crecimiento, se rompe el ciclo de desventaja que afecta a las generaciones sucesivas. A través de una educación sólida, se proporcionan herramientas para acceder a un futuro más prometedor.

Asimismo, una población educada es más innovadora y competitiva. La educación estimula la creatividad y el emprendimiento, ingredientes esenciales para el avance tecnológico y el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Cabe resaltar que, en un mundo en constante cambio, la educación otorga las habilidades necesarias para adaptarse a nuevas realidades, un aspecto crucial en el mercado laboral actual.

Por otro lado, la educación fomenta una ciudadanía activa. Las personas con acceso a una buena educación son más propensas a participar en la vida cívica y política de su comunidad, fortaleciendo así la democracia.

Finalmente, la educación debería ser vista como una inversión a largo plazo. A diferencia de un gasto asistencial que puede ser temporal, los beneficios de una educación de calidad perduran a lo largo de la vida, generando un impacto positivo en las generaciones futuras.

En conclusión, es hora de que el Estado y la sociedad en su conjunto cambien el paradigma de la educación en Chile. Debemos avanzar hacia una visión que priorice el desarrollo integral de cada estudiante, impulsando recursos que no solo sostengan la educación básica, sino que también nutran un entorno de aprendizaje dinámico y enriquecedor. Solo así podremos formar ciudadanos capaces de responder a un mundo en constante transformación y contribuir al bienestar general de la sociedad chilena.